

Análisis de los últimos 10 años:

El daño de la delincuencia en la economía casi se duplica y los privados asumen el mayor costo

Recientes investigaciones indican que el impacto económico del crimen en Chile va en aumento. Un nuevo reporte, de Clapes UC, avalúa los perjuicios en el 2% del PIB.

EDUARDO OLIVARES

Guardias, cámaras de vigilancia, alarmas. El menú de opciones para la protección de bienes muebles y propiedades en Chile se ha expandido en la última década, a la par de la percepción de mayor inseguridad pública. Distintos investigadores han medido el fenómeno y ahora un estudio de los especialistas Leonardo Hernández, Jorge Alfaro y Marcos Balmaceda, para Clapes UC, brinda la más reciente actualización: el daño de la delincuencia en la economía chilena se ha casi duplicado entre 2013 y 2022.

El salto es de 94,1%, medido con dólares comparables de 2022.

“Este aumento también se observa si el costo se mide en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), el que pasa del 1,4% en 2013 al 2,04% del PIB en 2022”, indican los autores.

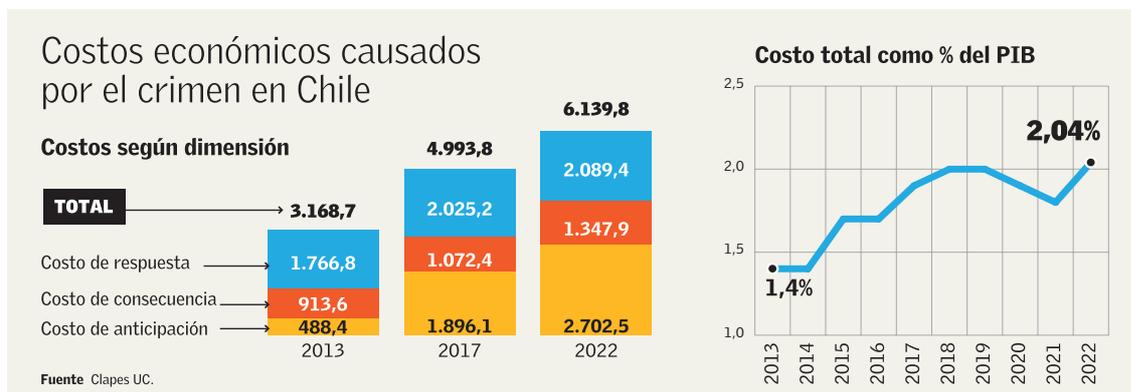
Agregan: “Cuando sumamos los costos asociados a los delitos de ‘cuello y corbata’, los resultados cambian marginalmente: el costo de la delincuencia alcanza un 2,1% del PIB en 2022”.

Medición conservadora

En esta investigación hay supuestos que los autores consideran conservadores. Por lo tanto, el impacto del crimen en la economía chilena medido allí debe considerarse como un piso.

“Por ejemplo, no consideramos el gasto completo en Carabineros, dado que la policía también tiene funciones de manejo de tránsito. Tampoco tenemos el gasto asociado a ciberseguridad, lo que incrementaría las cifras”, cuenta Leonardo Hernández.

Los investigadores trabajaron sobre una metodología ya establecida: se divide el



perjuicio de la delincuencia en costos por anticipación (medidas disuasivas), por consecuencia (delitos cometidos, como robos, lesiones, homicidios) y por respuesta (gastos asociados a las políticas públicas de seguridad).

“La metodología persigue cuantificar gastos que se producen por la delincuencia y que podrían evitarse en ausencia de la misma, por lo que pueden entenderse como una pérdida social debido a la delincuencia”, dicen Hernández, Alfaro y Balmaceda

Mauricio Olavarría, de la Universidad de Santiago, y Rodrigo Saens, de la Universidad de Talca, han encabezado por separado sendas cuantificaciones del efecto económico del crimen. Recientemente, Saens estimó el daño en un equivalente entre 2,5% y 3% del PIB. Usó un tipo de método contable que él también califica de conservador. Recuerda que el incremento en la percepción de inseguridad “claro que genera pérdidas de bienestar social, pero el método contable no sirve para cuantificarlos”.

Aunque estas investigaciones comparten un mismo tronco metodológico, no miden exactamente lo mismo. Por eso, enfatiza Hernández a “El Mercurio”, el hallazgo relevante del artículo de Clapes UC es cómo crece el per-

Los mercados ilícitos

La otra dimensión económica del crimen está en los llamados mercados ilícitos. Desde la Subsecretaría del Interior refieren al documento sobre la Política Nacional contra el Crimen Organizado, donde así lo definen: “Algunos de los mercados criminales más comunes y lucrativos son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, así como delitos medioambientales como el robo de cobre y el de madera”.

Pía Lizana, investigadora de AthenaLab, calculó el año pasado el impacto de las economías ilegales en sectores productivos: pérdidas por \$12 mil millones en la minería, US\$ 300 millones en la pesca y casi US\$ 68 millones en la madera. El 6 de diciembre, AthenaLab organizará un seminario sobre los efectos en distintos rubros.

juicio económico respecto del PIB, y la incidencia que allí tiene el gasto en seguridad asumido por privados.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó ese elemento en la Enade pasada. Allí dijo que, debido a la inseguridad, las empresas reducen la inversión e incurrir en pérdidas de productividad.

El costo privado

El trabajo de Clapes UC documenta que el gasto privado se incrementó a una tasa de 17,8% anual promedio entre 2013 y 2022, mientras que el sector público lo hizo en un “magro 1,5%”.

Rodrigo Saens, de la U. de Talca, agrega a este medio: “Pasamos de menos de un guardia privado por carabnero, a comienzos de los 90, a casi tres en la actualidad”.

Justo ayer el Senado aprobó la ley de seguridad priva-

da, que integrará el conjunto disperso de normas, reglamentos, decretos y manuales en la materia, cuenta el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. “Esta ley marco de la seguridad privada permitirá regular una industria que mueve cerca de US\$ 500 millones”, señala. Se modernizarán los procesos de certificación de guardias y vigilantes privados, entre otros avances, dice.

¿Y ahora?

La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2022, difundida el viernes, reveló que el 90,6% de las personas perciben que la delincuencia aumentó en el último año.

Los cálculos del impacto económico deberían actualizarse, creen los especialistas.

Hernández sostiene que como hay más gastos asocia-

“ (Se necesita) una reevaluación de las políticas de seguridad centradas en estrategias de prevención y respuesta más efectivas”.

CLAPES UC

dos a la seguridad y, dado que la economía no crece, es plausible pensar que también sube el perjuicio como porcentaje del PIB.

“Ahora habría que agregar los costos de las extorsiones y secuestros, recalculer los costos para evitar la victimización, dados los nuevos delitos que han aparecido en Chile, y recalculer a la luz de las alzas en la victimización”, responde Olavarría a “El Mercurio”. “También habría que agregar los costos del delito para el comercio y la industria, pues los costos que estimé están referidos a los hogares”, dice.

“La Enusc 2022 muestra que la tasa de victimización hoy es muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia y, por tanto, los costos directos asociados al delito deberían ser más menos los mismos que en 2019”, plantea Saens. Eso sí, se apunta con un bemo: “Chile es, junto con Uruguay y Perú, uno de los países con un menor costo del delito en Latinoamérica”.